

DEFENSA Y DESARME

América Latina y el Caribe

VOLUMEN II / N° 2 / ABRIL - JUNIO 1987 ✓



El Futuro de las Relaciones Hemisféricas de Seguridad

AUGUSTO VARAS

Las prioridades estratégicas de Reagan

Estando por finalizar la administración del presidente Reagan es oportuno por varias razones iniciar un balance en materias de seguridad hemisférica.

En primer lugar, el inicio de su primer período de gobierno estuvo marcado por la decisión de alterar lo que en los setenta se dio en llamar la "paridad estratégica relativa" entre las dos super-potencias. La argumentación estadounidense, de acuerdo al secretario de Defensa Caspar Wrinberg, era que la Unión Soviética —a través de una manipulación y no observancia de los acuerdos de limitación de armas y de cierta ingenuidad de los anteriores negociadores— había volcado la balanza estratégica en su favor. Esto exigía, según Weinberg, una política de recuperación del poder militar estadounidense junto a un endurecimiento en las negociaciones con la URSS. En segundo lugar, esta nueva orientación implicaba, según el secretario de Estado Shultz y el subsecretario de Marina

Lehman, contar con recursos militares propios, aptos para enfrentar a la URSS y sus aliados en cualquier parte del mundo. Tal estrategia implicaba descansar en las propias fuerzas (una vez recompuestas) y en el desarrollo de sistemas de armas que le dieran viabilidad a esta orientación. En tercer lugar, la materialización de estas políticas se expresaba en el desarrollo de la Iniciativa de Defensa Estratégica, en el incremento del poder naval hasta llegar a la meta de una "fuerza naval de seiscientos barcos", así como en el mejoramiento de los sistemas de proyectiles estratégicos. En la medida que la nueva política de defensa ponía el énfasis en los propios recursos, era necesario incrementar la capacidad estadounidense de apoyo de las fuerzas de despliegue rápido, así como las operaciones navales.

La estrategia de la "escalera horizontal", esto es de propinar un primer golpe a la URSS en todos y cada una de las fuentes potenciales de inicio de una eventual ofensiva soviética, sólo reitera el enorme esfuerzo militar que se propuso la administración Reagan, lo que quedó plasmado en la magnitud nunca antes vista del presu-

puesto de defensa de la actual administración. Según las propias revelaciones del ex-jefe del presupuesto de los EE.UU., David Stockman, el presupuesto final de defensa terminó incrementándose a una tasa real anual del 10 por ciento entre 1980 y 1986, es decir; el doble de lo prometido en la campaña electoral!

Posteriormente se abrió una amplia discusión —en parte motivada por ciertas embarazosas situaciones producidas durante la invasión de Grenada— en la cual quedó en evidencia la necesidad de mejorar la capacidad de proyección global del poder militar estadounidense, especialmente en lo referido al apoyo logístico de las operaciones en ultramar.

En síntesis, la alteración de la paridad estratégica relativa, que le diera a los EE.UU. una permanente leve ventaja sobre la URSS durante los sesenta y setenta, se transformó en un ariete de primera importancia para someter estratégicamente y políticamente al rival soviético, llevado al borde de su propio colapso como producto de una profunda crisis endógena.

Concepción instrumental de la seguridad regional

En el área latinoamericana —o hemisferio occidental para estos propósitos— la política de los EE.UU., durante el período de Reagan se ha caracterizado por cumplir el papel de “efecto de demostración” frente a la URSS. De acuerdo al mismo Weinberger, la nueva política de disuasión de los EE.UU. debía pasar cuatro pruebas cruciales, dos de las cuales eran la claridad y la credibilidad. Ambos requerimientos fueron puestos en práctica en Grenada, así como posteriormente frente a Nicaragua y Cuba. Encontramos aquí un primer elemento que ha caracterizado a las relaciones militares hemisféricas durante la administración Reagan. Así se manifiesta el carácter **instrumental** de su aproximación a los temas regionales, en función de la nueva política de disuasión, desde posiciones de mayor fuerza relativa o, más claramente, desde una clara superioridad estratégica. En palabras de Weinberger, es necesario negociar desde una posición que “promete una mayor fuerza relativa”.

Desde un punto de vista puramente estratégico es difícil encontrar justificaciones militares a la invasión de Granada, así como al uso contumaz del argumento militar en la crisis centroamericana, restringiendo las alternativas políticas de solución del conflicto. La explicación radica en que en todos estos casos se trataba de actuar sobre las percepciones de los dirigentes soviéticos —las que, de paso, se reconocían difíciles de apreciar— en función de los objetivos globales antes mencionados.

Un segundo aspecto de la política de los EE.UU. en la región se ha caracterizado por una sistemática falta de consideración de los reales temas regionales de seguridad. En la medida que las relaciones militares hemisféricas han sido leídas desde la anteriormente mencionada perspectiva estadounidense, las particularidades de las percepciones de seguridad de los gobiernos y/o élites militares continentales no han sido tomadas en consideración con la debida acuciosidad. Así, producto de la tentación de usar el apoyo de ejércitos latinoamericanos en Centroamérica se privilegiaron afinidades ideológico-políticas y ciertas relaciones bilaterales, como las argentinas, las que se convirtieron en la peor inversión posible hecha en las últimas décadas en estas materias. Esta ideologización de los vínculos militares bilaterales se volvió en contra de la propia política estadounidense al descarriarse el gobierno de Galtieri en Malvinas.

Al sesgo estadounidense de instrumentalización e ideologización de la seguridad regional, se le sumó el de la **politización** de las relaciones militares bilaterales, al implementar una subrogación de su papel militar por fuerzas militares liadas. La anteriormente fracasada política, llevada a cabo en Centroamérica desde los años veinte en adelante, y en Vietnam en los sesenta y setenta, se vuelve a repetir con las mismas características. Sus efectos negativos para la seguridad regional se pueden encontrar en el caso de Honduras, por ejemplo, donde la hiperinfluencia estadounidense ha generado nuevos problemas de rivalidad intraregional y de animadversión frente al ocupante de hecho.

El conflicto de Malvinas y sus efectos mediatos mostraron otra faceta de las difíciles relaciones militares hemisféricas, dada la incapacidad de los EE.UU. de liderar un “orden militar regional”. Así, a partir de la crisis terminal de hecho del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), los establecimientos militares latinoamericanos han buscado con urgencia su propia autosuficiencia estratégica. Argentina y Brasil han acelerado sus planes de desarrollo nuclear para utilizar tal energía en la propulsión de sus barcos, lo que les permitiría acceder a la categoría de “flotas de aguas azules” más que fuerzas de control ribereño. Igualmente, ambos países se han abierto a la cooperación nuclear y convencional con la República Popular China, lo que expresa una tendencia sostenida en el resto del área hacia la diversificación de las relaciones militares internacionales.

En el caso de Chile se sigue con tolerancia y cierta simpatía la tesis estratégica que insiste en el papel que este país puede jugar como protector de las líneas de comunicación marítima y de la defensa de la ribera oriental del Pacífico Sur ante el intento soviético de conver-

tirlo en un "mar rojo". Sólo en el Caribe la administración Reagan implementa un programa de desarrollo militar subregional con los nuevos estados de habla inglesa, a través de la constitución de la Fuerza Caribeña de Paz y la Fuerza de Tarea del Caribe, lo que ha terminado en la creación de un sistema de seguridad subregional.

El carácter instrumental y la politización de las relaciones militares hemisféricas mostró rápidamente sus efectos negativos. Contrariamente a las expectativas estadounidenses, los países latinoamericanos, en vez de alinearse plenamente con los intereses militares de la administración Reagan, adoptaron una mayor independencia y autonomía estratégica, lo que desde el punto de vista de los EE.UU. significó un aumento de la internacionalización de los conflictos regionales. Así, en Centroamérica la situación comenzó a escarparse de las manos de los formuladores de política en EE.UU. al comenzar a participar en él Fuerzas y establecimientos militares de otras regiones del mundo, tal como las del Medio Oriente. A falta de liderazgo estratégico real de los EE.UU. en la región, la internacionalización de los conflictos regionales obligó a esta potencia a asumir negociaciones y tácticas globales, cuyos resultados no fueron siempre beneficiosos para la política exterior de los EE.UU., tal como las revelaciones de la venta de armas a Irán lo están demostrando.

Intentos de recuperación de las relaciones militares bilaterales

- Así, en la segunda administración Reagan se está intentando un "control de daños", dados los devastadores efectos del primer período. Este esfuerzo se caracteriza por un intento de recuperación de las relaciones bilaterales militares, tratando de generar intereses de seguridad compartidos. Ejemplo de ellos es el esfuerzo por recomponer las relaciones militares bilaterales dañadas durante el conflicto de Malvinas con Argentina; el intento de proyectar las relaciones militares con Brasil a etapas superiores de colaboración militar, lo que ha desatado en este país una fuerte polémica entre quienes desean un alineamiento estratégico-militar con los EE.UU. y aquellos que aspiran a una proyección de poder autónomo en su área de competencia; en Chile, se intenta recomponer la relación con el Ejército a pesar de las claras implicancias que ello tendría en el terreno político, desconociendo el involucramiento de oficiales de alta graduación en actos de terrorismo internacional.

Paralelo a este intento de recomposición de las relaciones militares bilaterales —lo que explica las declaraciones del general Galvin, jefe del USSOUTHCOM, de que se

duplicarán durante 1987 las operaciones militares bilaterales— el propio concepto de seguridad hemisférica se extiende abusivamente a temas estrictamente de política interna. Se intenta así resolver la politización de las relaciones militares a través de una "estrategización" de las relaciones político-militares bilaterales.

De esta forma el problema del narcotráfico y de la migración ilegal a los EE.UU. adquiere características militares, al ser conceptualizados al interior de los actuales temas de seguridad nacional para la administración Reagan. Ahora no sólo el Estado Mayor Conjunto se hace cargo de desarrollar políticas y acciones militares frente a estos dos problemas, sino que el propio secretario de Justicia, Edwin Meese, se pronuncia sobre temas de seguridad regional.

De esta forma, no sólo se ha confundido lo político con lo militar —una tendencia ya secular en la política exterior estadounidense—, sino que los jefes militares han comenzado a tener una importancia política desmedida, compitiendo en versatilidad y accionar político con los propios representantes diplomáticos acreditados en los países latinoamericanos. Así, en el caso de Chile, durante la última visita del general Galvin, éste se exployó con toda propiedad sobre los problemas de la transición democrática en Chile. Esta ampliación del papel político de las FF.AA. estadounidenses en la política regional local, más que controlar los daños ocasionados anteriormente, sólo creará otros nuevos. Con ello aumentará la dificultad para unificar criterios de política gubernamental bilateral en los EE.UU., en la medida que las relaciones entre militares adquieren un nivel de autonomía nunca antes visto en la región. Se disminuirá así el papel de los diplomáticos profesionales y se estará dando un mal ejemplo a las propias FF.AA. locales, contradiciendo flagrantemente las afirmaciones del subsecretario de Estado Elliot Abrams cuando exhortaba a los militares latinoamericanos a "no arrogarse el derecho a decidir en nombre de su nación".

Finalmente, aún en materias castrenses, el todo es mayor que la suma de las partes. La suma de las relaciones militares bilaterales no arrojará automáticamente un nuevo marco hemisférico de seguridad. Este debe plantearse desde otro ángulo, intentando responder la pregunta si existe o no un interés estratégico regional común, capaz de convertirse en motor de nuevas formas de colaboración militar en la región.

En resumen, el autismo estratégico de los formularios de la política de defensa de los EE.UU. y el acentuado bilateralismo castrense mal podrá ayudar a crear un nuevo orden hemisférico de seguridad. Por el contrario,

CUADRO 1
GASTO MILITAR EN AMERICA LATINA
(millones US\$ constantes de 1980)

	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
South America										
Argentina	3,952	4,019	3,975	3,936	4,178	8,784	(6,536)	5,633	6,647	6,315
Bolivia	166	187	191	192	242	(257)	((209)	210	229	230
Brazil	2,009	1,858	1,656	1,296	1,347	1,526	(1,892)	1,855	1,988
Chile	1,286	1,446	1,726	1,744	1,918	2,160	1,913	1,950	(1,711)	1,824
Colombia	...	501	549	614	594	591	776	966	879
Ecuador	285	204	210	222	228	203	(190)	211
Guyana	40.7	35.3	30.0	38.4	30.2	28.2	(32.8)	(29.0)	(32.0)	31.8
Paraguay	57.9	60.9	56.3	60.7	73.7	76.2	86.3	45.3	60.3	59.1
Peru	1,120	850	667	(979)	(1,210)	(1,216)	(1,292)	1,289	1,252	1,057
Uruguay	201	209	244	296	391	356	(389)
Venezuela	1,158	1,114	1,413	1,607	1,798	1,813	1,461	(1,504)	1,543	1,593
Central America										
Costa Rica	33.7	31.2	33.3	32.1	27.1	31.8	30.5	33.6	32.5	33.9
Cuba	957	1,028	1,068	986	1,080	1,221	1,196	1,406	1,313	1,239
Dominican Republic	100	111	127	99.4	117	111	106	106	94.4
El Salvador	87.1	85.5	82.0	102	112	123	122	142	(182)	156
Guatemala	111	127	131	143	145	186	(198)	(224)	279
Haiti	15.8	19.6	22.2	20.1	18.9	17.4	15.6	15.7	(17.1)
Honduras	43.9	56.0	58.	79.0	(90.5)	(90.6)	93.0	118	(113)	137
Jamaica	95.2	99.2	89.7	76.7	83.2	81.8	83.8	(74.7)	72.5	(89.1)
México	803	794	979	1,046	1,291	1,119	1,360	1,194	1,136	1,228
Nicaragua	75.7	91.5	(61.5)	(95.7)	(104)	(113)	(168)
Panamá	41.0	44.2	46.6	42.2	43.3	49.2	52.5	75.9	78.5	80.1
Trinidad y Tobago	66.6	110	102	123	135	184	(153)	(121)	107	98.4

FUENTE: SIPRI, World Armaments and Disarmament, Yearbook 1987.

CUADRO 2

REGIONAL ARMS DELIVERIES, BY SUPPLIER, 1978-1985

(in millions of current U.S. dollars)

	East Asia/Pacific '78-81	'82-85	Near East/so. Asia '78-81	'82-85	Latin America '78-81	'82-85	Africa (Sub-Saharan) '78-81	'82-85
Non-Communist								
Of which:								
U.S.	3,569	3,610	19,620	23,630	274	1,212	258	437
France	360	250	7,165	12,635	1,595	695	835	800
United Kingdom	720	320	4,590	3,440	690	135	420	540
West Germany	265	400	2,285	1,585	340	2,305	700	155
Italy	135	410	1,780	1,960	685	690	525	460
All Other	1,875	1,490	3,260	9,085	1,670	1,585	910	745
Total non-Communist	6,924	6,480	38,700	52,335	5,254	6,622	3,648	3,137
(Major West European)*	1,480	1,380	15,820	19,620	3,310	3,825	2,480	1,955
Communist								
Of which:								
U.S.S.R.	4,760	4,100	27,315	24,300	2,615	3,265	3,265	5,295
All Other	240	475	5,245	13,140	25	920	845	755
Total Communist	5,000	4,575	32,560	37,440	2,640	4,185	5,275	6,050
GRAND TOTAL	11,924	11,055	71,260	89,775	7,894	10,807	8,923	9,187

* (Major West European category includes France, United Kingdom, West Germany, Italy).

FUENTE: Richard F. Grimmett, Congressional Research Service, Report No 86-99 F, May 9, 1986.

una consideración de los problemas propiamente estratégicos de América Latina, junto a una contención del proceso de expansión del rol de los militares estadounidense y latinoamericanos, podrá dar lugar a una nueva

inserción militar de la región en el marco internacional, capaz de proteger los intereses nacionales, la paz y la seguridad continental.

Las Relaciones Militares entre Brasil y los Estados Unidos.

FERNANDO BUSTAMANTE

A partir de 1980, el Presidente Reagan se planteó alterar los mecanismos por medio de los cuales su país había intentado mantener su influencia en América Latina.

Entre las nuevas políticas que se propusieron se contó con una drástica revisión de lo que había sido la política de asistencia militar la región. En efecto, las administraciones precedentes habían llegado a la conclusión de que América Latina no estaba bajo amenaza militar; que los peligros para la estabilidad de sus países eran internos, y que, por lo tanto, la asistencia más indicada debía enfatizar la eliminación de las causas estructurales que alimentaban conductas de rebelión violenta, junto con una dosis suficiente de ayuda anti-subversiva capaz de permitir a las fuerzas armadas locales mantener el orden interno.

En este contexto, el liderazgo hemisférico de los Estados Unidos buscaba canalizarse a través de mecanismos políticos e ideológicos: i.e. la política de derechos humanos promovida bajo la administración del Presiden-

te Carter; o a través de formas de cooperación económica como las de la administración Nixon bajo la influencia del Informe Rockefeller.

Para los EE.UU. el armamentismo latinoamericano era innecesario y desviaba fondos de las apremiantes tareas del desarrollo, agudizando las condiciones que alimentaban la verdadera amenaza para su seguridad: el descontento interno y el atraso. Asimismo se pensaba que la incorporación de armas costosas y sofisticadas induciría carreras armamentistas locales que incrementarían las posibilidades de conflictos vecinos. Estos a su vez darían la oportunidad a potencias extra-regionales como la Unión Soviética, para inmiscuirse en el hemisferio y aprovechar tal circunstancia para ganar posiciones y expandir su influencia.

Sin embargo, los países latinoamericanos entraron en creciente contradicción con esta política. Ella era vista como restrictiva de sus propios objetivos nacionales,

los cuales no se reducían a la mantención de un alineamiento con los EE.UU., ni a su inserción en el conflicto bipolar Este-Oeste. Así fue como, a partir de fines de la década de los años 60, un número creciente de países comenzó a adquirir tecnología militar de proveedores tanto europeos como del bloque socialista. A fines de la década pasada, los EE.UU. se vieron confrontados al hecho consumado que los países más importantes del hemisferio habían iniciado programas de modernización sin contar con la aprobación ni ayuda de Washington, haciendo caso omiso de las admoniciones de su vecino del Norte. En algunos casos, como en Brasil y Argentina, se iniciaron exitosos programas destinados a desarrollar una industria militar autóctona capaz de salir a la conquista de mercados externos.

En el caso de Brasil, fue fácil romper entre 1975-77 los acuerdos bilaterales de cooperación en dicho campo. Tal ruptura dejó a los militares estadounidenses desprovistos de los contactos e influencia, otrora tan estrechos, que les habían permitido moldear los procesos de socialización política, modernización y desarrollo profesional de sus colegas brasileños. Paralelamente a esta ruptura, las instituciones castrenses y el Estado brasileño tendieron a desarrollar una visión de su lugar en el mundo que enfatizaba el interés nacional, la proyección estratégica autónoma del Brasil y el desarrollo de las capacidades nacionales para desarrollar su propia política de poder y penetración en el África y en América Latina, sin necesariamente armonizarla ni ponerla al servicio de las prioridades de los EE.UU. La política brasileña se caracterizó, a partir de entonces, por un alto grado de pluralismo ideológico, pragmatismo y flexibilidad, que le permitió mantener buenas relaciones con los países del África luso-parlantes (entre otros), aun cuando estos se hallaban en abierto conflicto con los EE.UU.

En 1980, la nueva administración estadounidense reformuló su política militar hacia el hemisferio. Esta pasaba por dos ejes fundamentales: la reafirmación de la centralidad del conflicto con la Unión Soviética, y de la necesidad de re-alinear a los países del área con las prioridades norteamericanas, si bien teniendo en cuenta los cambios ocurridos desde la II. Guerra Mundial en las capacidades nacionales relativas de los países latinoamericanos; y, en segundo lugar, una revalorización de los factores específicamente militares de la relación. Esta revalorización tendía a dar un peso mucho mayor que en el pasado a las vinculaciones que podrían establecerse entre las respectivas FF.AA., incluso, de ser necesario, por encima y al margen de las autoridades civiles. Así, la transferencia de armamentos avanzados pasó a revestir una doble necesidad: por un lado, dado que el peligro

extra-hemisférico era visto como real e inminente, parecía necesario y se justificada pertrechar a los aliados regionales con equipos capaces de hacer frente a la amenaza (i.e. los MIG -23 cubanos). Por otra parte, se considera, que la negativa tradicional a vender armas sofisticadas había alienado a los latinoamericanos, y en especial a sus militares. La venta de armas avanzadas se presentaba como el medio por el cual las élites militares del continente podían volver a mirar hacia los EE.UU. con confianza y con la razonable seguridad de que podrían encontrar allí un apoyo para sus planes de modernización. La nueva política norteamericana se complementaba señalando que la política previa, además de contraproducente desde el punto de vista diplomático, no lograba sus objetivos manifiestos, pues los países latinoamericanos podían obtener armas modernas en otras partes, con el resultado de que lo único que se lograba, aparte de la animosidad de éstos, era perder mercados a manos de proveedores extra-regionales como Francia, Alemania o la propia Unión Soviética.

Ya desde su primer año, el nuevo gobierno de Washington inició una serie de contactos destinados a inducir en su homólogo brasileño el interés por aprovechar la nueva voluntad norteamericana de proporcionar armamentos en su país. Sin embargo, en el caso brasileño fue muy pronto evidente que cualquier negociación no podría basarse en la compra lisa y llana de productos terminados. En el sector público brasileño (y también en el privado), existía un sólido consenso en el sentido de que era fundamental desarrollar las capacidades nacionales para diseñar y producir sus propios sistemas de armamentos. Por lo tanto la cooperación militar con los Estados Unidos debería reestablecerse sobre la base de la transferencia por parte de este último país de la tecnología y los conocimientos necesarios para fortalecer la capacidad de la industria local. Asimismo, era fundamental para el Brasil que los productos elaborados a partir de dicha tecnología pudiesen ser exportados libremente a cualquiera de los mercados conquistados en la década anterior, incluyendo áreas conflictivas para los Estados Unidos, como el Medio Oriente.

El problema que se suscitó inmediatamente, fue el de las normas norteamericanas sobre exportación de tecnología de usos militares. Ellas impedían que las armas con ella producidas pudiesen ser exportadas sin previa autorización de los EE.UU. Esto le daba a Washington el derecho a vetar transacciones que pudiesen implicar que tecnología avanzada estadounidense pudiese caer en manos de países potencialmente hostiles, o que, sin serlo no diesen adecuadas garantías de que la citada tecnología no fuese a terminar en manos de po-

tencias enemigas, o no fuese a ser utilizada para propósitos antagónicos con la política exterior de Washington. De hecho, esto significaba que los brasileros no podrían exportar dichos armamentos a la mayor parte de sus clientes más seguros, y que las líneas de producción deberían limitarse a satisfacer la reducida demanda que el propio Brasil podría generar.

Esta situación redujo considerablemente el interés de los empresarios brasileros por los acuerdos y les quitó apoyo entre los propios militares, interesados en evitar todo desarrollo que limitará la libertad y autonomía de su propio naciente "complejo militar-industrial".

Así, el "Memorándum de Entendimiento" sobre transferencia de tecnología militar, que eventualmente se firmó en febrero de 1982, resultó un instrumento de alcances mucho más modestos que los originalmente pretendidos. Los brasileros maniobraron hábilmente para aparecer amistosos y deseosos de cooperar con el gobierno de Reagan, sin por ello, y en la práctica, comprometerse a mayor cosa concreta.

Lo anterior no obsta para que dicho instrumento haya servido para abrir las puertas a algunos modestos

flujos de asistencia, los cuales se han orientado en función de las necesidades de la modernización de determinados sistemas de las FF.AA. brasileras (defensa aérea, alerta temprana), o para incorporar tecnologías destinadas a hacer más eficientes ciertos procesos industriales dentro de las fábricas de armamentos. En otras palabras, el Brasil ha podido obtener acceso a ciertas componentes tecnológicas que no se incorporan en los productos terminados propiamente tales, sino que en los sistemas productivos que se utilizan para su elaboración. Por lo tanto se trata de transferencias que tienen como denominador común no interferir ni condicionar la capacidad exportadora de la industria bélica nacional.

Como puede verse, la política norteamericana —al menos en el caso del Brasil— no ha logrado reconstituir la dependencia militar de este país hacia los EE.UU., tal como ella existió hasta 1980. Por el contrario, ha sido ocasión para que Brasil demuestre su voluntad y capacidad de utilizar cualquier recurso disponible para maximizar sus capacidades y factores de poder nacional y, por esa vía, apuntar hacia la expansión de su autonomía relativa como actor estatal en el sistema global.

Volumen II N° 2 Abril-Junio 1987

Defensa y Desarme - América Latina y el Caribe, es una publicación del **Centro Latinoamericano de Defensa y Desarme**, que aparece tres veces al año, gracias al apoyo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), y a un convenio con **Cono Sur**, publicación bimestral de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Santiago-Chile. La preparación de esta publicación está a cargo del profesor investigador Augusto Varas.

Consejo editorial: Raúl Benítez Manaut (CELA-UNAM); Gral. (R) Edgardo Mercado Jarrín (IPEGE); Andrés Fontana (CEDES); Gabriel Aguilera (ICADIS); Gloria Ardaya (FLACSO - La Paz); Eliezer Rizzo de Oliveira (UNICAMP); Carlos Portales (FLACSO - Chile); Carlos María Lezcano (GCS - Paraguay); Mariano Aguirre (CIP - España); Isaac Sandoval (Bolivia); Marcial Rubio (APEP); Juan Rial (PEITHO). Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización previa.

Dirección: Casilla 19078, Santiago 19, Chile.

Diagramación: Miguel Inostroza L.

Impresión: Imp. Editorial Interamericana - Fono 98157 - Santiago